

La espiral de violencia en Turquía y la urgencia de una salida a la cuestión kurda

Marzo de 2016

Introducción

Son tiempos de grave violencia en Turquía y de aniversarios agrios en relación a la cuestión kurda, por lo que podría ser y no es. Tres años después del Newroz (celebración del año nuevo kurdo, el 21 de marzo) que simbolizó el inicio del proceso de paz entre Turquía y el PKK, y cumplido un año de la primera escenificación pública conjunta en la historia de Turquía de un intento de solución dialogado al conflicto armado con el PKK (comparecencia de Dolmabahçe), la situación actual es de un retroceso tal que se hace difícil imaginar salidas. El legado acumulado de treinta años de conflicto, la deriva actual de la guerra y la difícil coyuntura de factores locales e internacionales que envuelven al conflicto y los riegos de lo que aún puede venir obligan a buscar urgentemente una desescalada militar y a explorar áreas de aproximación entre las partes.

La situación en Turquía relativa a la cuestión kurda ha dado un giro grave, con el colapso del proceso de paz, el reinicio de la guerra y su extensión a núcleos urbanos en el sudeste y ciudades del oeste, incluyendo la capital, Ankara, y graves atentados de ISIS. Los balances de víctimas mortales en 2015 fueron dispares según las fuentes, pero se superó el umbral de varios centenares (194 miembros de fuerzas de seguridad, al menos 221 combatientes del PKK y 151 civiles fallecidos de julio a mediados de diciembre, según ICG; según el Ejército cerca 500 insurgentes murieron sólo entre principios de diciembre e inicios de enero de 2016; según el PKK, murieron 220 combatientes kurdos y 1.544 miembros de las fuerzas seguridad en 2015; más de 224 civiles fallecidos entre agosto y principios de febrero de 2016, según la ONG local TIHV).

¿Qué ha sucedido en este último año? El diálogo de paz iniciado en 2013 (el llamado Proceso de Imrali) quedó cancelado en el primer trimestre de 2015, desautorizado por el presidente, Recep Tayyip Erdogan, y afectado por la polarización política de la pre-campaña electoral y la inestabilidad regional, y se dio paso a un escenario más volátil, con algunos enfrentamientos entre Ejército y guerrilla. El PKK acusó ya en mayo de ese año al Ejército de poner fin al alto el fuego oficioso con el que mayoritariamente había respondido a la tregua unilateral del PKK de 2013, aquella que reforzó el inicio del proceso de paz. Pese al deterioro, el grupo armado se comprometió a no llevar a cabo acciones ofensivas durante la campaña electoral de los comicios de junio. Esa campaña fue escenario

de grave tensión política y social (polarización social por la agenda pro-régimen presidencial de Erdogan; rivalidad electoral entre el oficialista AKP y el partido pro-kurdo HDP, en la apuesta de este último por superar el umbral electoral del 10%; regresión democrática, agravada por la ley de seguridad aprobada en marzo, y el contexto regional de grave crisis, entre otros elementos). El HDP sufrió más de un centenar de ataques en 60 provincias en periodo electoral, incluyendo uno en un mitin electoral en Diyarbakir en junio (cuatro muertes y un centenar de heridos), atribuido a ISIS. En paralelo, el movimiento kurdo denunció la existencia de células de ISIS en Turquía. El AKP perdió su mayoría absoluta (40,87% del voto y 258 de los 550 escaños) y el HDP salió reforzado (13,12% del voto, 80 escaños). En los meses siguientes la clase política no logró acuerdo para una coalición electoral, lo que llevó a la convocatoria de elecciones anticipadas en noviembre.

El reinicio de la guerra entre Turquía y el PKK ha tenido una dimensión alarmante de impactos indiscriminados sobre población civil

La situación se desbordó en la segunda mitad del año. Un grave atentado atribuido a ISIS en Suruç (frontera con Siria) el 20 de julio, contra jóvenes turcos y kurdos en apoyo a la reconstrucción de Kobane, con 33 muertos y un centenar de heridos, y del que el movimiento kurdo responsabilizó en última instancia al Gobierno turco, fue seguido de varios asesinatos de miembros de fuerzas de seguridad por actores cercanos al PKK y por el propio PKK, dejando la tregua en papel mojado. A su vez, el Gobierno lanzó a finales de ese mes una campaña militar y policial, presentada como una ofensiva contra ISIS y PKK, y en la práctica materializada en una reanudación de la guerra de gran escala contra el PKK y contra el movimiento kurdo en su conjunto. Abarcó bombardeos contra el PKK en Turquía y norte de Iraq, detenciones masivas –incluyendo de civiles y cargos electos– y operaciones militares especiales a modo de cercos y asedios contra núcleos urbanos kurdos, algunos de los cuales asistieron a un proceso de creación de milicias armadas kurdas, así como a declaraciones unilaterales de autonomía por parte de algunos ayuntamientos. Defensores de derechos humanos alertaron de lo desproporcionado de las operaciones especiales de asedio y toques de queda y del grave impacto en los civiles. A su vez, el PKK realizó acciones ofensivas de envergadura: 16 soldados muertos en un ataque en Daglica (Hakkari) en septiembre y 14 policías fallecidos en otro ataque en Igdir ese mes, entre otros hechos.

La situación aún se deterioró más en los últimos meses del año. Un atentado en Ankara el 10 de octubre contra una marcha pro-diálogo de paz, con amplia presencia kurda, mató a un centenar de personas e hirió a varios cientos. Analistas, expertos y medios de comunicación lo atribuyeron a ISIS. El Gobierno responsabilizó conjuntamente a ISIS, al PKK y al Gobierno sirio, ahondando en la fractura que separa al Estado y a la población kurda, que acusó al Gobierno de negligencia y de responsabilidad por su apoyo directo o indirecto a ISIS durante los años de guerra en Siria. El mismo día del atentado en Ankara el PKK anunció un alto el fuego para facilitar las elecciones anticipadas de noviembre.

La tregua fue rechazada por el Estado, que continuó con la ofensiva militar y policial a gran escala. En las urnas, el AKP recuperó apoyo social (317 escaños y 49,5% de votos), mientras el HDP se mantuvo por encima del umbral electoral aunque perdió votos (obtuvo 59 escaños y 10,7%). El Ejército desplegó 10.000 tropas apoyadas por tanques y artillería en localidades del sudeste en diciembre y medios periodísticos señalaron el uso de armas pesadas por ambas partes. Se vieron especialmente afectados núcleos como Cizre y Silopi (provincia de Sirnak), Sur (Diyarbakir). Según la Fundación de Derechos Humanos de Turquía, 162 civiles (incluyendo 32 menores y 24 personas mayores de 60 años) murieron entre mediados de agosto y finales de año en el marco de 58 operaciones especiales con toques de queda en 19 distritos de siete ciudades, en los que residen 1.377.000 personas. Según informaciones de prensa, varios cientos de miles de civiles huyeron por la violencia –200.000 según algún diario local, “varios cientos de miles” según otros medios, 100.000 según la Policía–. En algunos llamamientos el PKK llamó a la población a permanecer en sus localidades y a protagonizar un levantamiento masivo contra Turquía, que no llegó a materializarse.

Todo ello fue en paralelo al clima general de persecución por parte del Estado de defensores de derechos humanos, activistas y periodistas discordantes con el Gobierno. En noviembre fue asesinado en Diyarbakir el reputado presidente del Colegio de Abogados de Diyarbakir y defensor de derechos humanos Tahir Elçi mientras comparecía ante los medios llamando al fin de la violencia entre Turquía y el PKK.

Además, irrumpió de nuevo en escena el grupo armado kurdo TAK (Halcones del Kurdistan) –considerado por expertos como un grupo bajo el paraguas del PKK–, con el anuncio en diciembre de 2015 de inicio de una

campaña ofensiva contra el Estado y “colaboradores” en represalia por las operaciones militares en el sudeste, advirtiendo también a aerolíneas y turistas. TAK reivindicó ese mes un atentado en un aeropuerto internacional de Estambul, que mató a un trabajador e hirió a otro.

En clave política, en un congreso en diciembre, el movimiento kurdo legitimó la insurgencia urbana kurda y llamó a la creación de regiones autónomas dentro de Turquía a través de una resolución de plataforma kurda DTK. Así, la cuestión de la autonomía volvió a situarse con fuerza en la discusión política, generando fuertes críticas del Gobierno.

Organizaciones de derechos humanos alertan de la desproporción de las operaciones del Ejército contra núcleos urbanos kurdos

El primer trimestre de 2016 asistió también a una grave escalada de la violencia, tanto en el sudeste de Turquía como zonas del oeste. Se intensificaron las operaciones militares de toque de queda y asedio en diversos distritos, con graves balances de víctimas y nuevos movimientos de desplazamiento forzado. El Gobierno dio por concluidas las operaciones en los distritos de Cizre y Sur, mientras se iniciaron otras. Se

multiplicaron esos meses las voces que alertaron sobre los graves impactos en población civil, incluyendo organizaciones como Amnistía Internacional, y actores políticos como el principal partido opositor turco, el CHP. La ONG HRW señaló la dificultad de esclarecer la verdad, en medio de las restricciones de acceso a causa de la violencia. En el contexto de violencia, el HDP hizo llamamientos en defensa de un reinicio del diálogo de paz.

El inicio de 2016 también estuvo marcado por un aumento de la presión sobre actores civiles, con nuevas detenciones de numerosos alcaldes y concejales del HDP; así como por el fortalecimiento de actores armados en el lado kurdo, con la creación de un órgano de coordinación de las milicias armadas en las ciudades kurdas (YPS Coordinación) y la reivindicación por el TAK de un atentado suicida con coche bomba en la capital, Ankara, contra un autobús militar, que causó la muerte de 29 personas –20 de ellas militares de alto rango– y heridas a más de 60, en pleno centro y cerca de importantes sedes militares. El TAK alegó que se trataba de una represalia por las operaciones del sudeste. En marzo, el PKK anunció el establecimiento de un movimiento conjunto con otras 10 organizaciones de Turquía y, a su vez, advirtió de que contraatacaría a Turquía en cualquier lugar del territorio. Otro atentado suicida con coche bomba junto a un autobús público en pleno centro de Ankara en marzo causó 37 víctimas mortales y 125 heridos, muchos de ellos civiles. El

TAK reivindicó la acción, alegando que, pese a las víctimas civiles, el objetivo de la ataque eran las fuerzas de seguridad.

El clima en Turquía a inicios de 2016 incluyó otros graves hechos de violencia como un atentado suicida atribuido a ISIS en una zona turística de Estambul, que mató a 11 personas, todas extranjeras. Además, siguiendo la pauta de 2015, en los primeros meses de 2016 continuó en el conjunto de Turquía la grave represión contra sectores políticos y sociales discordantes con la praxis gubernamental, incluyendo medios de comunicación y periodistas, activistas, políticos y académicos, en un contexto de grave retroceso de los derechos humanos en el país, como señalan organizaciones locales e internacionales.

La nueva encrucijada de la cuestión kurda

La deriva actual de la guerra y la confluencia de factores en que ésta transcurre conllevan elementos

preocupantes. Por varias razones. Por una parte, el reinicio de la guerra a finales de julio por iniciativa de Turquía supone el entierro del moribundo proceso de paz, del cual el presidente turco renegó ya poco después de la Comparecencia de Dolmabahçe, desautorizando los frágiles avances y las cuestiones en discusión, entre ellas las de mecanismos procesales (ej. comité local observador, equipo negociador de refuerzo a líder del PKK en la cárcel). Más allá de diferencias y obstáculos sobre formatos, agendas, implementación de compromisos y otros elementos -presentes en cualquier proceso de paz y que no son insuperables cuando hay voluntad de alcanzar la paz-, el colapso del proceso de paz señala algo más profundo y alarmante: la falta de visión de paz del Gobierno, principalmente. Así se evidencia en la vuelta a las políticas de securitización y militarización masiva y en el alineamiento AKP-Ejército. En el entierro del proceso de paz se intuyen también factores de poder político, relativos a las prioridades del AKP de reforzar al máximo su posición de poder y, especialmente, la de su Presidencia, frente a actores rivales y explícitamente opuestos a su agenda política, como es el propio movimiento kurdo.

La comparecencia de Dolmabahçe y el entierro del proceso de paz en 2015

Entre los elementos relevantes del año, en enero se amplió la composición de la delegación kurda que visitaba periódicamente al líder del PKK Abdullah Öcalan, con la inclusión de la activista y escritora Ceylan Bağrıyanık, en representación del movimiento de mujeres kurdas, tras largas reivindicaciones finalmente aceptadas por el Gobierno turco. Otro de los hechos más relevantes del año fue la comparecencia conjunta el 28 de febrero en el Palacio de Dolmabahçe de altos representantes del Gobierno (viceprimer ministro, Yalçın Akdoğan, y el ministro de Interior, Efkan Ala) y representantes de la delegación kurda participante en el proceso de paz (diputado del HDP Sürreya Önder, diputada del HDP Pervin Buldan). Los meses previos estuvieron marcados por dificultades y tensiones, incluyendo las acusaciones del PKK al Gobierno de dilación en el proceso y el ultimátum de su líder, Abdullah Öcalan, planteando al Ejecutivo la fecha del 15 de enero como fecha límite para una declaración conjunta sobre el proceso. El Gobierno, por su parte, emitió mensajes públicos en que señalaba que el PKK iba a abandonar las armas, cuestión que sin embargo el PKK no consideraba un tema previo sino a negociar durante el proceso. Según informaciones de prensa, en la reunión del 4 de febrero se llegó a cierto principio de acuerdo para una declaración. Finalmente, la comparecencia de Dolmabahçe consistió en una puesta de escena conjunta, en que Önder enunció 10 puntos considerados por Öcalan como centrales para el proceso de paz y Akdoğan emitió también declaraciones. La comparecencia y los 10 puntos fueron interpretados como un principio de acuerdo a modo de hoja de ruta y temas de agenda.

Los 10 puntos incluían: política democrática, definición y contenido; dimensión nacional y local de la resolución democrática; garantías legales y democráticas de la ciudadanía libre; relación entre política democrática, estado y sociedad y su institucionalización; dimensiones socioeconómicas del proceso de resolución; relación entre democracia y seguridad en el proceso de una manera que se proteja el orden público y las libertades; soluciones y garantías legales para las cuestiones relativas a mujeres, cultura y ecología; comprensión pluralista del concepto de identidad, su definición y

reconocimiento; definición de república democrática, patria común y población en línea con criterios democráticos y en un sistema con garantías legales y constitucionales; y una nueva Constitución para una transformación democrática. Además, en la comparecencia, Önder transmitió el mensaje de Öcalan de llamamiento al PKK para la celebración de un congreso extraordinario en primavera para tomar la decisión estratégica e histórica de abandonar la lucha armada sobre la base de un consenso mínimo en cuanto a los principios. Remarcaba también que era una invitación a sustituir la lucha armada por la política democrática. Por su parte, en la comparecencia, el viceprimer ministro afirmó que consideraban significativa esa declaración de énfasis en la política democrática y de paso hacia el fin de las armas y el fin definitivo de acciones. Según Akdoğan, con las armas fuera de la ecuación, se ganará *momentum* para el desarrollo democrática. Señaló que están determinados a alcanzar una solución con el apoyo de la población y que consideran una nueva Constitución como una oportunidad importante para resolver muchos problemas crónicos.

En las semanas y meses siguientes se evidenciaron los desacuerdos y fragilidades del proceso. En el tradicional mensaje de Öcalan emitido con motivo de la festividad del Newroz (año nuevo kurdo, 21 de marzo), el líder del PKK llamó al grupo a celebrar un congreso en que discutir el fin de la lucha armada y determinar las estrategias políticas y sociales sobre los principios de la declaración. Algunos análisis señalaron que el llamamiento no cumplía las expectativas del Gobierno, que espera un compromiso para el desarme. El PKK advirtió que desarme y finalización de la lucha armada eran dos cosas diferentes. El Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, advirtió poco después del Newroz que no podría adoptar nuevos pasos si el grupo no renunciaba a las armas y le exigió medidas concretas. Además, Erdogan desautorizó anuncios de realizados por figuras del Gobierno sobre la aceptación de crear un comité local de observación y, significativamente, desautorizó también la comparecencia conjunta de Dolmabahçe, afirmando que no había sido oportuna. El KCK –sistema de organización que aglutina al movimiento kurdo, incluyendo el PKK– enunció a finales de marzo como condiciones para dejar la lucha armada el inicio de negociaciones con Öcalan sobre la base de los 10 puntos de Dolmabahçe, la creación de un comité local de supervisión, una comisión de la verdad bajo paraguas parlamentario y un proceso negociador que lleve a una Constitución democrática. Además, el KCK distinguió de nuevo entre paralizar la actividad armada y deponer las armas, señalando que el contexto bélico en Oriente Medio no permitía deponer las armas. El movimiento kurdo reclamó a Turquía reevaluar el proceso de paz en abril. Sin embargo, entre finales de marzo y abril Erdogan reiteró que no habría más pasos si el PKK no deponía sus armas y negó que existiera una cuestión kurda. Además, el Gobierno no volvió a autorizar en todo el año nuevas visitas de la delegación kurda a Öcalan tras las visitas del 18 de marzo y 5 de abril, lo que se suma a las negativas de visita a los abogados de Öcalan. En ese contexto, el KCK descartó la opción de un congreso en que discutir el fin a su actividad armada, aunque dejando la puerta abierta si se daban las condiciones, y advirtió de que el aislamiento de Öcalan infringía una línea roja.

El contexto de tensión, polarización y los múltiples incidentes de seguridad del periodo preelectoral (elecciones parlamentarias de junio) influyeron también en el proceso de paz y de manera negativa. El movimiento kurdo acusó al Gobierno de promover un clima favorable al hostigamiento y persecución contra objetivos kurdos. Tras el atentado suicida de julio contra un centro cultural kurdo en Suruç (frontera con Siria), del que el movimiento kurdo responsabilizó al Gobierno por apoyar directa o indirectamente a ISIS, el PKK puso fin a su alto el fuego ese mes. El Estado turco, por su parte, puso en marcha a finales de ese mes una intensa campaña militar y policial contra el PKK y el movimiento kurdo. A su vez, varios ayuntamientos bajo control del partido prokurdo HDP emitieron declaraciones de autonomía. Así, se dio paso al reinicio de la guerra abierta y de grave tensión política y social, enterrando un proceso de diálogo que en el primer trimestre del año había quedado ya gravemente afectado. Hubo llamamientos al diálogo, como por parte del col-líder del HDP, Selahattin Demirtas, que instó al Gobierno y al PKK a poner fin a la violencia sin condiciones. El PKK advirtió que no daría pasos unilaterales. El Gobierno mantuvo su exigencia al PKK de poner fin a la violencia y de desarme. Los últimos meses del año fueron escenario de un grave aumento de la violencia en núcleos urbanos del sudeste, con operaciones militares con grave impacto en civiles. El mismo día de un grave atentado atribuido a ISIS en Ankara en octubre con una manifestación pro-diálogo con

amplia participación kurda, el PKK anunció un nuevo alto el fuego para facilitar las elecciones anticipadas de noviembre, pero la medida fue rechazada por el Gobierno, que mantuvo su política beligerante y la intensificó tras las elecciones de noviembre. Quedaban cerradas así todas las oportunidades de diálogo frágilmente sostenidas en el primer tercio de 2015.

En 2016, el nuevo plan de acción del Gobierno sobre la situación de la región kurda –de rechazo absoluto al diálogo con el PKK y el movimiento kurdo y centrado en cuestiones de “orden público” y económicas– aleja más que nunca las posibilidades de diálogo. El Gobierno y la Presidencia de Turquía han sido explícitos en su negativa a cualquier opción de diálogo con el PKK y parecen apostar por una estrategia de desgaste y aislamiento contra el movimiento kurdo. En paralelo, defienden solo el diálogo con actores kurdos pro-AKP.

Por su parte, el PKK asegura que mantiene intacta su posición de defensa del diálogo de paz como salida al conflicto, pero advierte que no harán ya más pasos unilaterales y que el diálogo solo podría darse bajo determinadas circunstancias, con garantías. Al mismo tiempo, y en el contexto de guerra e inexistencia de diálogo, la estrategia del PKK combina estrategia de guerra en las ciudades a través de milicias urbanas, de amenazas de ataques en cualquier lugar de Turquía y de previsible aumento de acciones guerrilleras en el sudeste.

Así, más que un pulso previo a un próximo reinicio de diálogo, podría estarse ante una nueva fase de guerra más larga y mucho más violenta en que las opciones de un nuevo proceso de paz son mucho más complejas.

Por otra parte, la nueva fase bélica ha tomado forma de guerra de carácter indiscriminado, con operaciones de toques de queda y asedios de gran escala por el Ejército y fuerzas especiales contra núcleos urbanos, algunos de los cuales habían emitido declaraciones unilaterales de autonomía y en los cuales jóvenes kurdos y kurdas organizados en forma de nuevas milicias armadas por el PKK se habían hecho fuertes a base de barricadas y zanjas, con las que impedir el acceso de Ejército y policía. El paso de la guerra en las montañas y áreas rurales más remotas de los últimos años al retorno a la guerra en las ciudades es sumamente alarmante, porque multiplica los impactos en la

población civil, en contraste con etapas anteriores de violencia más contenida.

Según el último balance de la Fundación de Derechos Humanos de Turquía, entre el 16 de agosto y el 5 de febrero, hubo 58 operaciones confirmadas de toque de queda prolongado en al menos 19 distritos de siete ciudades del sudeste de Turquía (Diyarbakır, Şırnak, Mardin, Hakkâri, Muş, Elazığ y Batman), que han afectado a sus 1,37 millones de personas censadas. En ese periodo, y según esa fuente, han muerto al menos 224 civiles, incluyendo 42 menores y 30 personas mayores de 60 años. Según fuentes defensoras de derechos humanos, los impactos directos de esas operaciones incluyen además desplazamiento

forzado de población, restricciones de acceso a atención médica, agua y alimentos, ataques directos contra objetivos civiles como depósitos de agua, incendios de casas, restricción de acceso a delegaciones observadores y bloqueos informativos, entre muchos otros, que se suman al legado de impactos de décadas anteriores. Se ha asistido, por tanto, a una grave crisis humanitaria. Defensores/as de derechos humanos locales e independientes alertan de la grave desproporción de la violencia por parte de Turquía y de la dimensión de castigo colectivo de las operaciones “de toque de queda” que ha llevado a cabo el Estado turco desde

el reinicio de la guerra, agravadas desde diciembre pasado, con imágenes de destrucción que muchos kurdos comparan con Kobane.

Los atentados con víctimas civiles perpetrados por el PKK o sectores afines dan cuenta también de esta nueva fase de violencia más indiscriminada. La irrupción del TAK hace temer nuevos hechos de violencia con graves impactos en civiles al ser perpetrados en áreas rodeadas de población civil. El ataque de marzo de 2016 en Ankara supone un salto cualitativo muy alarmante, por el elevado número de víctimas mortales. No obstante está precedido de ataques en el pasado, como el que hirió en

Más allá de diferencias y obstáculos sobre formatos, agendas e implementación de compromisos, el colapso del proceso de diálogo de Imrali señala algo más alarmante: la falta de visión de paz del Gobierno turco

octubre de 2010 a una treintena de personas, incluyendo a 17 civiles, en plena plaza Taksim de Estambul, en un atentado supuestamente dirigido contra las fuerzas de seguridad habitualmente establecidas en la plaza.

En tercer lugar, la guerra se ha visto agravada por la influencia del factor regional. La cuestión kurda en Turquía ha asistido a un proceso de *sirianización* y, a su vez, el conflicto Turquía-PKK se ha proyectado en la crisis en Siria. Algunos de estos elementos incluyen el fortalecimiento regional del PKK, tanto en términos de capital humano y simbólico como logístico, militar y político –con las organizaciones PYD/YPG, vinculadas al PKK, como aliadas en terreno de EEUU y Rusia, con reconocimiento político y acceso directo o indirecto a apoyo militar, aumento de las filas del PKK y YPG, entre otros. El PKK, por tanto, está en una posición de más fuerza que en pasado para confrontar a Turquía. No obstante, ese fortalecimiento es también dependiente de apoyos externos instrumentales e influidos por agendas geoestratégicas y, por ello, coyunturales, lo que dibuja incerteza sobre el grado de apoyos sustantivos al autogobierno kurdo en Siria en el marco de una hipotética salida al conflicto en Siria. En ese sentido, los propios kurdos no confían plenamente en la posición de actores como Rusia sobre el autogobierno kurdo en Siria y recelan de actores como Irán.

Otro elemento de peso en el tablero regional es el de los temores de Turquía a ese nuevo autogobierno kurdo de facto al otro lado de su frontera, entendiendo que podría desencadenar –ya lo está haciendo– mayor presión a favor de descentralización y autonomía en Turquía. Para Turquía la amenaza es doble: la autonomía entendida en sí misma como amenaza a su unidad nacional; y un fortalecimiento del movimiento kurdo y del PKK resultante de una hipotética autonomía, entendido como amenaza al poder político del AKP y a las prerrogativas del Estado en el sudeste de Turquía. La persecución judicial en Turquía contra posicionamientos a favor de las autonomías –como las declaraciones a finales de 2015 de la plataforma prokurda DTK y de líderes del partido prokurdo HDP– y la guerra abierta indiscriminada contra el movimiento kurdo –milicias y población civil– se enmarcan en esa mirada sobre la percepción de amenazas. No obstante, para el movimiento kurdo de Turquía y Siria ya no se está en los tiempos de reclamación de existencia de la cuestión kurda o de

El legado de heridas abiertas y de cisma Estado-población kurda coincide además con un tiempo histórico en que el movimiento kurdo de Turquía se sabe no solo víctima resiliente sino sujeto activo y de derechos

reconocimiento de derechos básicos, sino de reconocimiento del derecho al autogobierno.

El autogobierno territorialmente en expansión del PYD en Siria, favorecido por el apoyo militar de actores como EEUU y Rusia, frente a ISIS, ha activado todas las alarmas de una Turquía que inicialmente había mantenido contactos e incluso cooperado con el PYD en la fase inicial de la guerra en que el PYD/YPG era un actor secundario, sin apenas cobertura internacional y con un autogobierno fragmentado. Frente a esa expansión de las YPG, Turquía llegó

incluso a plantearse la opción de una intervención militar terrestre en Siria y, mientras, ha lanzado ataques contra las YPG y librado una encarnecida guerra diplomática con el objetivo de anular al PYD (y, con ello, al PKK). El apoyo de actores internacionales al YPG/PYD, ya sea de socios de Turquía como EEUU o de nuevos enemigos, como Rusia, irrita profundamente a una Turquía celosa de su soberanía sobre la cuestión kurda. El factor regional ha tenido además otros impactos, como la expansión de ISIS en Turquía, trasladando a suelo turco la guerra entre ISIS y el movimiento kurdo, bajo acusaciones kurdas a Turquía de negligencias de seguridad y de apoyo directo o indirecto a Turquía.

El legado del conflicto y el cisma Estado-población kurda

El conflicto entre Turquía y el PKK ha acumulado a lo largo de sus más de 30 años unas 40.000 víctimas mortales –en torno a la mitad combatientes del PKK, una cuarta parte fuerzas de seguridad y otra cuarta parte civiles, según diversas fuentes–, entre 1 y 3 millones de personas desplazadas forzadas, desaparecidos, asesinatos extrajudiciales no esclarecidos, tortura, violencia sexual, destrucción de pueblos, disrupción de modos de vida, éxodo forzado a ciudades, empobrecimiento, feminización de pobreza, desempleo juvenil, encarcelamiento de menores, estigmatización y discriminación múltiple, ilegalización de partidos políticos y asociaciones prokurdos, suicidios invisibilizados de soldados kurdos, militarización prolongada en el sudeste de Turquía, economía corrupta de la guerra, secuestros de civiles turcos –incluyendo profesores y trabajadores

de la construcción–, atentados con víctimas civiles, amenazas y coacciones contra sectores económicos, entre muchos otros.

La guerra es en parte expresión de una cuestión kurda histórica no resuelta que se remonta a los orígenes de la República de Turquía y a un proceso de construcción de Estado uniformizador y militarista en que la población kurda, *el otro*, es concebida como amenaza interna y también externa –en tanto Turquía entiende que puede ser instrumentalizada por fuerzas exteriores *enemigas* de Turquía, llámese comunismo u otros en el pasado, o régimen de Assad, entre otros, en la actualidad. Tanto en su dimensión más general –cuestión kurda– como en su materialización más virulenta –conflicto bélico desde los años 80–, la brecha entre el Estado y una amplia capa de su población kurda es evidente, marcada por los impactos de larga duración y la falta de soluciones definitivas a aspiraciones legítimas. Si cada campaña de violencia ha acrecentado esa brecha, la reapertura de la guerra en 2015 agudiza en extremo ese abismo.

El legado de heridas abiertas y de cisma Estado-población kurda coincide además con un tiempo histórico en que el movimiento kurdo de Turquía se sabe no solo víctima resiliente sino sujeto activo y de derechos en un proceso en la última década y media de caída de tabúes sociales en Turquía –mayor admisión social de la diversidad, incluyendo en algunos momentos reconocimiento gubernamental de la cuestión kurda y de los “errores” cometidos por el Estado en el pasado–, de empoderamiento colectivo kurdo, de puesta en marcha de estrategias políticas y sociales –acción política parlamentaria pese a ilegalizaciones sucesivas de partidos políticos prokurdos, política municipalista, campañas de desobediencia no violenta, movilización de alianzas políticas y sociales, entre otras–, intentos de solución negociada (Diálogos de Oslo, Proceso de Imrali), y autogobiernos kurdos en Oriente Medio (Región Autónoma del Kurdistán en Iraq, con autonomía *de facto* desde los noventa y con amparo legal desde 2005; Rojava, en Siria, con autogobierno *de facto* desde 2012), entre otros elementos. Así, heridas abiertas, cisma y empoderamiento kurdo configuran parte del contexto social en que se ha reiniciado la nueva guerra y que conviene no perder de vista.

Los riesgos de una guerra sin tregua y la necesidad de salidas

El conflicto parece encaminado hacia un callejón sin salida y a una espiral de violencia, atrapado entre la política militarista de Turquía de pretender conseguir la aniquilación del PKK, incluso con estrategias de castigo colectivo indiscriminado que ahondan en la brecha Estado-población, y la estrategia del PKK de multiplicar los frentes de guerra: armando y formando para la guerra a milicias urbanas de nuevas generaciones de jóvenes, perpetrando o amparando atentados suicidas, incluyendo con graves impactos en civiles, y de previsible aumento de acciones ofensivas guerrilleras a partir de primavera.

El Gobierno turco debería pensar seriamente en iniciar una desescalada militar y en retomar las bases de acercamiento expresadas en la comparecencia de Dolmabahçe

Esta nueva fase de guerra llega cargada de elementos de riesgos. Entre ellos, la mencionada mayor predisposición a escalar el conflicto por ambas partes, incluyendo a través de estrategias con graves impactos en civiles, como son las operaciones de asedio y los atentados. Asimismo, la percepción de falta de alternativas, tras el fracaso del proceso de paz y en medio de la fuerte inercia de la violencia, desencadenadora de más violencia y la política del Gobierno turco

de excluir toda opción de diálogo con el PKK o con el movimiento kurdo, pese a la disposición al diálogo bajo ciertas condiciones del PKK.

Aumentan las voces –también entre sectores kurdos– que alertan sobre los riesgos de una deriva hacia una situación de guerra civil, precedida por la violencia social de la etapa electoral y postelectoral en 2015, incluyendo numerosos ataques por sectores nacionalistas contra sedes políticas del partido prokurdo HDP y la criminalización del movimiento kurdo y de sectores independientes que defienden el diálogo de paz. Hace ya algunos años que analistas locales alertan de que las guerras del futuro en torno a la cuestión kurda en Turquía podrían caracterizarse por una violencia más desdibujada. Conviene no obviar tampoco la elevada frustración, falta de oportunidades e historias de vida con traumas familiares y duras experiencias de prisión siendo menores –en aplicación de polémicas leyes antiterroristas– de un amplio sector de la juventud kurda del sudeste, parte de la cual acaba uniéndose a las guerrillas o milicias urbanas del PKK. La violencia es, en muchos contextos de guerra, una vía

de supervivencia y de afirmación individual y colectiva, entre otras múltiples motivaciones. No obstante, por ahora, guerrillas y milicias mantienen una aproximación disciplinada a la orientación general estratégica del PKK.

Ante ese tablero de grave deriva violenta y de riesgos mayores, urge una salida. El proceso de Imrali está sepultado y la frágil confianza, si es que existió, está enterrada. La apuesta por Turquía de excluir al PKK y al movimiento kurdo de toda ecuación de solución mediante la aceleración de la guerra contra ambos, obvia las causas de fondo de la cuestión kurda y del conflicto armado. Desentendiéndose de la responsabilidad y posibilidad de alcanzar una paz duradera y justa para toda la población, Turquía se arriesga a más violencia y a violencia más encarnizada e indiscriminada. El Gobierno turco debería pensar seriamente en iniciar una desescalada militar y en retomar las bases de acercamiento expresadas en la comparecencia de Dolmabahçe como posible punto de partida. Más allá de posibles deficiencias, en Dolmabahçe se recogieron puntos sensibles para las dos partes, incluyendo cuestiones de ciudadanía, identidad, pero también de seguridad y “orden público”. Se necesitan por tanto voces y actores, internos y externos, que lleven al Gobierno turco a una desescalada, con todos los argumentos que hagan falta, incluyendo los más fríos, como son los de índole económica.

A su vez, el PKK debería replantearse su estrategia de perpetrar o amparar ataques suicidas y atentados dirigidos contra objetivos civiles o con graves riesgos de impactos en civiles y aplicar estrictamente en la práctica el compromiso predicado con respecto al derecho internacional humanitario. Será cada vez más difícil pedir al PKK un alto el fuego, dado el acumulado de rechazos del Gobierno a sus altos el fuego unilaterales y dado el contexto actual de guerra, pero en cambio será más necesario que nunca pedirle contención en su conducción de la guerra y priorización del derecho a la vida y máxima protección de la población civil. Políticamente, está en manos del PKK y del conjunto del movimiento kurdo la reflexión sobre la ecuación entre medios y fines.

El PKK ha apuntado que podría volver al diálogo en determinadas condiciones, lo cual es sumamente importante para una futura –aunque por ahora improbable– salida negociada al conflicto. Sería importante que en la fase de guerra que llega, el

PKK destaque en sus discursos internos y externos esa puerta abierta a una solución negociada bajo determinadas condiciones, para evitar que su visión de paz quede enterrada por la nueva espiral de violencia.

La nueva fase de guerra en Turquía coexiste también con una etapa de máxima polarización en Turquía entre el Gobierno (y Presidencia) y gran parte de la oposición política y social en torno a ejes como la agenda presidencialista del presidente Erdogan, la fuerte regresión de derechos y libertades fundamentales, los escándalos de corrupción y la política exterior del Gobierno, entre otros. Los espacios para el desacuerdo político son cada vez más reducidos en un país que, sin embargo, fue escenario de un impulso democratizador bajo Gobierno del AKP hace apenas una década.

Se necesita, por tanto, a todos los niveles la adopción de estrategias y medidas que puedan influir positivamente en una desescalada de la violencia y el retorno al diálogo, incluyendo por parte de actores diplomáticos con capacidad de influencia en este escenario, sociedad civil y actores económicos, entre muchos otros. Al mismo tiempo, actores como la UE deberían sopesar su estrategia actual con respecto a Turquía, resituando el foco en el derecho internacional de los

derechos humanos y en el derecho internacional humanitario así como en la prevención y resolución de conflictos, en lugar de aproximaciones securitarias e interesadas a cuestiones como los conflictos armados y sus consecuencias en civiles.

Urge el acompañamiento y apoyo a alianzas transversales y sectoriales locales que pongan el foco en la agenda de derechos humanos y en una salida negociada al conflicto. Iniciativas locales, como las de mujeres de orígenes y ámbitos diversos, incluyendo turcas y kurdas, movilizadas conjuntamente en la plataforma Iniciativa de Mujeres por la Paz (Barış için Kadın Girişimi), en defensa una solución dialogada y pacífica al conflicto, son más necesarias de que nunca. La movilización de académicos en defensa de la vuelta al proceso de paz y de denuncia sobre los impactos de la política belicista del Gobierno da cuenta de las enormes dificultades que afrontan las voces locales pro-diálogo. En definitiva, frente a los nuevos tiempos de guerra en Turquía, se hace más necesario que nunca movilizar estrategias y apoyos internos y externos en favor de una reducción de la violencia y de búsquedas de salida dialogada al conflicto.

Será cada vez más difícil pedir al PKK un alto el fuego, dado el acumulado de rechazos del Gobierno a sus treguas unilaterales y la deriva actual, pero será necesario reclamar priorización del derecho a la vida y la protección de civiles
